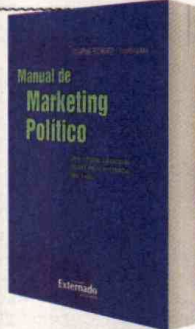


EL RINCÓN DE LA ACADEMIA



El ejercicio de la comunicación es un ejercicio de poder. Difundir, dar a conocer, mostrar, divulgar un mensaje, un significado, una realidad, puede ser visto también desde una apuesta estratégica. En tiempos hipermodernos, la política también es objeto del "marketing". El campo electoral en la actualidad es mucho más complejo y la diversidad de elementos que influyen en la elección racional o emocional de los votantes son muchos más enriquecidos, hemos pasado de la valla publicitaria a los anuncios multimedia en el 2.0. Pero no todo es la audiencia ni los públicos, sino también el candidato, y su equipo. ¿Cuál es el momento en que se debe contestar una

entrevista y cuándo no? ¿Se debe trinar un chiste o se pierde el carisma ante los votantes? ¿Qué debe aparecer en un perfil de Facebook? Todas estas preguntas se suman al inventario. Es por ello que un grupo de investigadores se ha sumergido en el mundo de las estrategias mediáticas con fines electorales, y plasmaron sus reflexiones y resultados en el libro **Manual de Marketing Político**, coordinado por **Eugénie Richard**, docente investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El libro acaba de ser publicado por la prensa editorial del centro educativo, a la cual Richard está vinculada.

La ilegalidad de las deportaciones masivas

RODRIGO UPRIMNY*



LA EXPULSIÓN MASIVA DE COLOMBIANOS por el gobierno Maduro es una inaceptable violación del derecho internacional, como lo muestra un simple contraste de algunos de los hechos conocidos con los principios que rigen internacionalmente la expulsión de extranjeros.

Esos principios fueron recientemente sistematizados por el órgano especializado para la codificación del derecho internacional, que es la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de Naciones Unidas, que adoptó en 2014 un proyecto de articulado sobre las reglas internacionales que rigen la expulsión de extranjeros.

Según ese documento, que es la doctrina más autorizada sobre el tema, los Estados pueden expulsar a los extranjeros de su territorio, pero ese derecho tiene límites, que fueron desconocidos por el gobierno Maduro en muy distintas formas. Por ejemplo, las reglas sistematizadas por la CDI señalan que los deportados deben ser tratados con respeto a su dignidad (art 13), pero hay muchas denuncias de malos tratos por la Guardia venezolana. Igualmente señalan que el Estado que expulsa debe ser especialmente cuidadoso con las personas en situación de vulnerabilidad, como los niños o los adultos mayores (art 15), y que debe garantizar el derecho a tener familia (art 18), lo cual tampoco ha ocurrido pues se conocen casos de niños que quedaron separados de sus padres. Y además, el Estado deportante debe tomar medidas apropiadas para proteger la propiedad de las personas expulsadas (art. 20), lo cual tampoco ha hecho el gobierno Maduro.

Por límites de espacio no puedo detallar los anteriores aspectos, por lo cual me centro en un solo punto, que es en sí mismo muy preocupante, y es el carácter colectivo de esta deportación, pues más de 1.000 colombianos han sido expulsados simplemente por ser colombianos y estar en una parte de Venezuela. Ahora bien, según la CDI, la expulsión colectiva de extranjeros está prohibida.

La razón de esta prohibición de las deportaciones colectivas es muy sencilla: un Estado, al expulsar a un extranjero, incluso si éste se encuentra en situación irregular, debe explicarle la razón de la deportación y debe darle una mínima oportunidad para defenderse. Esto no ocurre si las expulsiones son colectivas y precipitadas, como las que está haciendo el gobierno Maduro, pues no hay decisión caso por caso ni posibilidad de que la persona se oponga.

Esta deportación masiva desconoce entonces el derecho internacional. Pero es además injusta, pues estos colombianos humildes están siendo convertidos en chivos expiatorios por problemas que tienen otros orígenes y otros culpables. Por ello la respuesta del presidente Santos, al exigir respeto por los derechos y dignidad de los colombianos, pero manteniendo la cabeza fría, es el camino correcto, pues lo peor sería que ocurriera un escalamiento de xenofobias mutuas, que no ayuda en nada a los colombianos expulsados y, en cambio, genera una situación políticamente muy riesgosa para nuestros pueblos hermanos.

* Director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

Thumor



La valisa

ALFREDO MOLANO BRAVO



CORREN A TORRENTES LÁGRIMAS DE cocodrilo por la expulsión de colombianos de Venezuela. No es que no dé rabia ver a los miles de compatriotas cargando colchones, sillas, gallinas y sueños y dejando atrás su plante y su casa destruida por un buldócer. Me produce tanta indignación como la que me causó el desplazamiento de campesinos del Catatumbo ocasionado por las masacres ordenadas por Mancuso. Entre 1997 y 2005 mataron 13.919 pobladores de esas tierras donde brota el petróleo, se esconde el carbón y se impone la palma. Sólo Camilo, el hombre de confianza de Mancuso que huyó de Ralito y se refugió en Venezuela en compañía de Vicente Castaño, tiene que responder ante los jueces por 5.200 homicidios.

Venezuela fue refugio de colombianos y Colombia de venezolanos en las guerras civiles del siglo XIX. Pero las más importantes migraciones hacia Venezuela se dieron entre los 50 y los 80. De un lado, los campesinos empujados por la Violencia para salvar sus vidas, y después, cuando al vecino se le llamaba la Venezuela Saudita, salieron a buscar oficio. En estos periodos los colombianos contribuyeron al desarrollo de los estados de Táchira, Zulia y Mérida. El campesino de estas regiones era colombiano porque

los venezolanos eran obreros del petróleo.

Después vino la economía del rebusque, del contrabando. Los petrodólares permitieron importar de todo y los colombianos de la frontera compraban barato allá y traían a vender caro. Maicao se volvió ciudad a punta de contrabando de cigarrillos y televisores. Se ganaba el 100 %, el 200 % sin esfuerzo. Comprar combustible casi regalado en San Antonio y venderlo a precios internacionales en Cúcuta era, y seguía siendo hasta hace una semana, un negocio fabuloso.

Hay que decir lo que todo el mundo sabe: la Guardia Nacional es la que facilita la economía del matute. Por los retenes pasan los miles de toneladas y los millones de galones, que al llegar a Colombia nuestras pomposas autoridades civiles y militares tampoco ven. De tarde en tarde le echan mano a una góndola con harina o con cigarrillos para ir a cobrar el sueldo sin mala conciencia. Y nada más. Esa mafia, manejada por las grandes manzanas podridas, entendió que los matutes servían para lavar los dólares que los narcos sacaban por La Guajira, y le entraron también al negocio. La Guajira está en manos de paramilitares desde hace por lo menos 10 años. La punta del iceberg es el caso de Kiko Gómez y de su carnal Marquitos.

Venezuela aguantó el juego mientras el barril estaba a 100, a 80, pero ya a menos de 40 dólares la cosa es a otro precio. Las fronteras son el bolsillo roto de la economía venezolana. Venezuela tiene derecho a aplicar

sus leyes para defenderse. Nadie lo niega. Otra cosa es la modalidad, verdaderamente sionista, de aplicarla. La Guardia Nacional, criatura de Juan Vicente Gómez, está acostumbrada a la brutalidad y no sería raro que por andar untada en el contrabando de gasolina o de cocaína, los dos efectivos asesinados por la espalda en Ureña no hayan sido ejecutados por colombianos sino por matuteros, sin importar dónde hayan nacido. Pero Maduro no puede iniciar un proceso contra una de las patas de su poder y menos en este momento preelectoral, con una economía que hace aguas. Pero el cuento de que "guerra en las fronteras, paz en el interior" que usó Laureano Gómez cuando los peruanos invadieron Leticia puede que no le salga como quiere porque en Venezuela puede haber cinco millones de colombianos cedulados, que son un poco de votos en épocas de tanta escasez como la actual.

Levantar el patriotismo es peligroso porque no se puede hacer sin despertar el mismo efecto en el país vecino. Es lo que hizo Uribe en Cúcuta la semana pasada. Desgañitarse llamando a la guerra es mero oportunismo y hasta folclórico parecería si no fuera tan irresponsable. No dijo ni pío sobre los hornos crematorios que usó el Iguaño en Villa del Rosario para incinerar a 98 colombianos en 2001. Se trataba de "no dejarle rastros a la Corte Internacional", según declaró alias Hernán a **El Espectador**, y añadió: "No, nunca vi. Cuando iban a asesinar a una persona, yo nunca estaba ahí. No me gustaba ver eso".

Hoy hay que defender tanto a los colombianos expulsados de Venezuela como las negociaciones que se están dando en La Habana.